

3^{ER} CONGRESO MUNDIAL DE LA CSI 18-23 DE MAYO DE 2014 BERLÍN



REFORZAR EL PODER DE LOS TRABAJADORES

PROYECTO de Declaración del Congreso

Tabla de contenidos

Introducción	3
La economía global	4
La mano de obra global	7
Acción climática	8
Paz y democracia	9
Conclusión	10

Introducción

Los ciudadanos se sienten abandonados por sus Gobiernos. Más del 50% de la población mundial se ha visto afectada directamente o en su entorno familiar por el desempleo o la reducción de horas de trabajo, más del 50% tiene un trabajo vulnerable o irregular y el 40% lucha por sobrevivir en la desesperación de la economía informal. La falta de confianza hacia las instituciones es considerable.

Los Gobiernos y las instituciones internacionales no han conseguido garantizar unas democracias seguras e inclusivas para las personas ni un planeta sostenible para el Siglo XXI.

No han logrado construir economías estables, a un coste tremendo para los trabajadores y trabajadoras, y sus familias y comunidades;

No se ha hecho frente a las amenazas climáticas; y

No han reforzado la democracia ni aportado soluciones para la paz mundial.

Los ciudadanos del mundo entero están perdiendo cada vez más la confianza en sus Gobiernos, ya que se da prioridad a los intereses de las empresas sobre las necesidades, las preocupaciones y el sustento de los trabajadores y trabajadoras.

La economía global

Las políticas de ‘ajuste estructural’ de los años 80 y 90 paralizaron el desarrollo en los países más pobres, y hoy en día la ‘austeridad’ está perjudicando el crecimiento y la inclusión en demasiadas naciones desarrolladas.

Los países en desarrollo conocían ya de primera mano la naturaleza de la crisis y la desigualdad, antes de que la ambición excesiva del consumo avivado por los créditos y las finanzas sin regular provocase la ‘gran recesión’ de 2007.

Hoy día, la economía mundial no es más estable de lo que era hace siete años y, además, se registra hoy una acerba crisis de desempleo y desigualdad que está dañando tanto nuestras economías como nuestras sociedades.

Las empresas y sus partidarios políticos han aprovechado la gran recesión para inclinar la balanza del poder firmemente a favor de las grandes corporaciones y a expensas de los ciudadanos ordinarios, viniendo a erradicar décadas de progresos conseguidos por los sindicatos y otras fuerzas progresistas, demoliendo la democracia.

Dos generaciones de ambición corporativa han exacerbado las crecientes desigualdades, intensificado la marginación de una generación de jóvenes, atrofiado el crecimiento global e incrementado la desesperación representada por un creciente sector informal donde las normas sencillamente no se aplican – un sector donde mujeres, migrantes y jóvenes están sobre-representados.

Pese a disponer de pruebas evidentes de que sus políticas neoliberales resultan destructivas y sencillamente no funcionan, las instituciones financieras internacionales continúan presionando a los Gobiernos para que se plieguen al poder de los mercados financieros, y los Gobiernos han cedido a sus demandas. No predijeron ni previnieron la crisis económica y siguen fracasando en su intento de regular la ambición y la destrucción ocasionada por el capital especulativo.

El pronóstico más halagüeño apunta a que seguiremos viviendo un período de prolongado estancamiento.

La Encuesta Global de la CSI 2013 reveló que una de cada dos familias trabajadoras se ve afectada directamente por la pérdida de empleo o por la reducción de horas de trabajo. Las mujeres jóvenes, en particular, son las más afectadas.

Más de la mitad de la población mundial afirma que sus ingresos se han reducido por debajo del costo de la vida en el curso de los últimos dos años.

El 59% de la población ya no consigue ahorrar.

La desigualdad está aumentando en la inmensa mayoría de los países.

La desigualdad en el nivel de ingresos ha aumentado en 17 de los 24 países de la OCDE para los cuales se dispone de datos.

El informe de la OCDE ‘Crecimiento Desigual’ revela que aunque los ingresos disponibles crecieron anualmente en promedio un 1,7% entre mediados de la década de 1980 y finales de la del 2000, la distribución de dicho crecimiento ha sido muy desigual. El decil superior aumentó anualmente una media del 1,9% mientras que el decil inferior apenas creció un 1,3%. Como consecuencia de ello, el coeficiente de Gine medio en los países de la OCDE, que se situaba en 0,29 puntos a mediados de los años 80, se ha incrementado en casi un 10% para 2010.

El informe más reciente de la OCDE (2013), con datos actualizados sobre desigualdad para los años de crisis, hasta 2010, no indica que se haya revertido la tendencia a la desigualdad – muy al contrario. Las desigualdades respecto a los ingresos se incrementaron aún más y más rápidamente que nunca antes. El aumento entre 2008 y 2010 fue tan importante como en los doce años anteriores a la crisis.

En el mundo en desarrollo, mientras que el índice de pobreza, medido en base a 1,25 USD al día (PPA), descendió globalmente del 43,1% en 1990 al 20,6% en 2010, sigue habiendo más de 1.200 millones de personas que subsisten por debajo de este umbral ya de por sí muy bajo y en condiciones de privaciones extremas (Banco Mundial, 2012).

Lo que las instituciones financieras se niegan a reconocer es que unas desigualdades en rápido aumento sitúan en perspectiva incluso estos logros marginales, suponiendo una amenaza a cualquier nueva reducción de la pobreza.

Las tendencias registradas en las últimas décadas han mostrado que un crecimiento rápido no resulta suficiente para hacer que nuestras sociedades sean más inclusivas y justas. Por ejemplo, en Botswana, China, Costa Rica y la República Dominicana, un crecimiento relativamente rápido vino de la mano con un incremento significativo de la desigualdad de ingresos y la reducción de la pobreza fue muy inferior de lo que cabía esperar.

Y sin embargo, no tiene que ser este el caso. En países con líneas de crecimiento similares, como Ghana y Brasil, los beneficios del crecimiento se distribuyeron de manera más equitativa y el impacto sobre la pobreza y el trabajo decente resultó más significativo, gracias en gran parte a la intervención del Gobierno.

El escándalo de la evasión de impuestos por parte de los ricos y las corporaciones dentro y entre distintos países, se suma a los recortes de servicios públicos, empleo y seguridad social.

Entre 2000 y 2010, el número de personas cubiertas por convenios colectivos descendió en dos tercios de los países examinados por el Informe sobre el Mundo del Trabajo de la OIT (2012).

Cientos de millones de trabajadores ven denegado su derecho a un salario mínimo con el cual puedan vivir con dignidad.

Y el 75% de los ciudadanos tienen una protección inadecuada o ninguna protección social.

Sindicatos en todo el mundo encabezan la lucha por la justicia económica y social, con políticas basadas en una distribución justa de los ingresos, en lugar de las promesas vacías de la austeridad neoliberal.

Los Gobiernos, a instancias de las instituciones internacionales, han declarado una guerra contra los derechos de los trabajadores y sitúan los intereses de los bancos, las instituciones financieras y las grandes empresas por encima de los de sus propios ciudadanos. Apenas el 13% de las personas entrevistadas en la Encuesta Global de la CSI 2013 piensa que su Gobierno antepone los intereses de las familias trabajadoras.

La CES ha instado a los Gobiernos de la UE para que adopten un ‘plan de recuperación’.

La CSI ha pedido al G20 que implemente su Plan para el Crecimiento y el Empleo, empezando por invertir un billón de euros en infraestructura y empleo tanto en países desarrollados como en desarrollo – la mitad del dinero que se utilizó para el rescate de los bancos.

Apoyamos un acuerdo ambicioso sobre el clima que, sabemos, con inversiones destinadas a hacer que la economía sea más ecológica, podría suponer millones de nuevos puestos de trabajo sostenibles para nuestros hijos y nietos.

Pedimos inversión en la economía de cuidados, donde la dignidad del trabajo decente supone también dignidad de cuidados y oportunidades para nuestras familias y comunidades, y exigimos que se ponga fin a la subvaloración del trabajo de la mujer.

Nos movilizamos para que la igualdad de género se haga realidad en todo el mundo, y para realizar los derechos de la mujer en el trabajo, en el hogar y en la sociedad.

La educación pública, una sanidad abordable, protección de la infancia, cuidados infantiles, cuidados para los ancianos, apoyo a los discapacitados, programas activos del mercado de trabajo y mucho más, forman la base de unas sociedades dignificadas donde los servicios públicos de calidad figuran como elemento central de la inclusión social.

Hemos promovido medidas para tener en cuenta a la juventud, incluyendo garantías a los jóvenes respecto a la educación, el empleo y la protección social, con un incremento considerable de los aprendizajes para aportarles la cualificación necesaria para un crecimiento sostenible y para responder al potencial de las nuevas tecnologías.

Hemos pedido acción por parte de las instituciones y políticas que formalicen los empleos en la economía informal, incluyendo un piso de protección social y un salario mínimo que permita a las personas vivir con dignidad. La protección social debe reemplazar los sistemas de previsión corporativos que están dominando últimamente la política pública. Y estamos determinados a revertir los ataques contra la negociación colectiva.

Exigimos que los objetivos de desarrollo post-2015 de la ONU incluyan trabajo decente, un piso de protección social y justicia climática.

El modelo de capitalismo del Siglo XX ha fracasado, y el ‘Consenso de Washington’ debe ser enterrado para siempre. Seguir como si no hubiese pasado nada ahora, en el Siglo XXI, no sería aceptable. Necesitamos un nuevo acuerdo de Bretton Woods que garantice un contrato social global basado en los derechos, con la OIT en el eje central de la toma de decisiones. Es necesario reconstruir nuestras economías en base a nuevos modelos económicos que estén al servicio de las personas y sus comunidades.

Justicia social para todos, no beneficios para unos pocos, ha de formar parte de nuestro futuro.

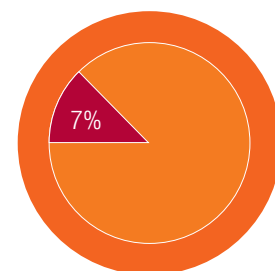
Sólo será posible lograr naciones socialmente justas si la voz colectiva de los ciudadanos es lo bastante fuerte. Sólo podrá conseguirse trabajo decente en lugares de trabajo seguros si los trabajadores y trabajadoras tienen suficiente poder como para negociar mejores condiciones.

Esto requiere que nos organicemos en nuestros lugares de trabajo y comunidades – que se movilice el poder de los trabajadores y trabajadoras para lograr un cambio.

La mano de obra global

Pero el reto es enorme:

- La población activa global asciende a 2.900 millones;
- Los trabajadores con empleo formal representan 1.700 millones;
- La mano de obra sindicalizada asciende a 200 millones;
- El 40% de la mano de obra remunerada en el mundo está constituida por mujeres, que sin embargo representan menos del 15% de los líderes sindicales;
- 50% de los trabajadores tienen un empleo vulnerable, mayoritariamente las mujeres;
- El desempleo entre las mujeres es mayor que entre los hombres, mientras que menos de 70 mujeres son económicamente activas por cada 100 hombres;
- El desempleo juvenil es de alrededor del 12% en todo el mundo – el doble que para los trabajadores/as adultos; y
- El 40% de la economía global es informal.



El reto central es el crecimiento sindical – organizar para asegurar que contemos con el poder democrático necesario para realizar los derechos y conformar un mundo del trabajo que aporte empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social para hombres y mujeres.

Acción climática

No hay empleos en un planeta muerto.

La acción respecto al clima no es algo negociable. Con los niveles de carbono en la atmósfera más altos de la historia, la humanidad está entrando en aguas desconocidas y viviendo muy por encima de los límites que el planeta puede sostener. Las posibilidades de estabilizar los aumentos de temperatura en un 2% pueden haberse esfumado, pero si no se toman medidas urgentes, las predicciones de un incremento del 4% para principios del próximo siglo podrían dar como resultado muerte y destrucción para un inmenso número de personas en el mundo entero.

Hay una vía para garantizar la supervivencia, pero los Gobiernos han de tener el valor de emprenderla.

La CSI acepta tanto el imperativo moral de preservar un planeta habitable, y aprovechar los empleos que la acción climática puede crear. Pedimos un compromiso hacia una ‘transición justa’ y trabajaremos con miras a la adopción de un instrumento de la OIT que oriente sobre la acción de Gobiernos y empleadores. También nos esforzaremos por garantizar que el capital de nuestros trabajadores/as se invierta en la economía real, estableciendo un objetivo inicial del 5% de las inversiones en la economía verde para 2016.

Todos los empleos deben ser más limpios si queremos que nuestra economía resulte más ecológica, y el trabajo decente ha de ser un elemento central de esta transformación.

Conforme el mundo se prepara para alcanzar un acuerdo global sobre emisiones y cuestiones relativas al clima antes de una nueva fecha límite en diciembre de 2015, la CSI movilizará a sus miembros y a sus comunidades.

Lograr que los Gobiernos asuman sus responsabilidades respecto al clima representa una prioridad importante, pero también lo es asegurarse de que vivamos respetando los límites del planeta y que se responda a las cuestiones cruciales de seguridad alimentaria, energética y de suministro de agua.

Los sindicatos se movilizarán para pedir de sus Gobiernos un acuerdo global ambicioso y vinculante en 2015 y continuarán luchando por la justicia climática, incluyendo garantías de una transición justa.

Paz y democracia

El Congreso reafirma el compromiso de la CSI hacia un mundo libre de armas de destrucción masiva y hacia el desarme, con unas Naciones Unidas capaces de evitar y poner fin a los conflictos tanto dentro de un país como entre distintos países. No obstante, no existe sustituto alguno a la autoridad democrática de los pueblos para garantizar la paz y la justicia, ni a la resolución de los conflictos mediante el diálogo.

La CSI respalda a nuestros compañeros y compañeras implicados en las luchas por la liberación y el combate por la democracia, incluyendo en Bahréin, Egipto, Libia, Palestina, Siria y Túnez.

Apoyamos asimismo la demanda de los nuestros por la paz y la seguridad en naciones asoladas por intensos conflictos y/o víctimas de la opresión, como Afganistán, Belarús, Guinea, Haití, Irán, Iraq, Malí, RD del Congo y Somalia.

Deploramos además la denegación de derechos, reafirmando nuestra firme postura en la lucha por obtener justicia legal y que se ponga fin a la impunidad en Colombia, Guatemala, Fiji, Swazilandia, Turquía y Zimbabwe.

Continuaremos oponiéndonos a la opresión por parte de los Estados contra mujeres y migrantes, contra los pueblos indígenas, o contra cualquier persona a causa de su religión o distinto origen étnico, y que se ponga fin a toda forma de discriminación, denigración y acoso en el trabajo.

Conclusión

La CSI está determinada a reforzar el poder de los trabajadores – el poder para moldear unas sociedades y economías socialmente justas. Este Congreso elaborará planes de acción para asegurar:

- Crecimiento de los sindicatos
- Empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social; y
- Realización de derechos

La incertidumbre a la que se enfrenta la población crea descontento y mata su esperanza. Exigimos un plan y exigimos esperanza. Empleo, empleo y empleo – trabajo decente apoyado por un marco global de derechos.

Tenemos una visión respecto a un futuro positivo para los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Con un movimiento sindical mundial fuerte, podemos dar forma a un futuro económico y social alternativo. Un movimiento que pueda organizar y movilizar el pleno potencial de su inmensa membresía para alzarse unidos contra los intereses particulares del capital no regulado.

La CSI está orgullosa de nuestro movimiento global inclusivo de trabajadores y trabajadoras, y permaneceremos a su lado y al de sus familias mientras reforzamos el poder de los trabajadores para consolidar la democracia, reivindicar derechos y negociar para lograr un mundo socialmente justo.

